

Editorial

Una vuelta por el vecindario

Economía y política confluyen de manera distinta en los cinco países andinos.

Un recorrido por la región andina en estos días refleja un entorno complicado. En los países del vecindario se encuentran hoy crisis políticas, debacles económicas y severas contracciones, fuertes movilizaciones sociales, así como dinámicas positivas de crecimiento.

El panorama económico no es tan sombrío como el político. De acuerdo con las más recientes proyecciones del Banco Mundial, en 2019 América Latina solo crecerá un 0,8 por ciento, excluyendo a Venezuela de las mediciones. Tras unos años de dinamismo, impulsado por los altos precios de las materias primas, los países latinoamericanos entraron en una preocupante fase de desaceleración.

Pero mientras los tres grandes latinoamericanos -Brasil, México y Argentina- registran pobres desempeños para este año, las perspectivas para las naciones andinas no son tan sombrías. Al contrario, Bolivia, Perú y Colombia cuentan con crecimientos positivos, tanto en este año como en el siguiente.

Bolivia es el país suramericano cuyo PIB crecerá más en 2019, con 3,9 por ciento. El segundo lugar lo ocupa Colombia, con un estimado de 3,3 por ciento. La diferencia está en que mientras las demás economías andinas caen este año con respecto al 2018, nuestro país es el único que repunta. Si bien el ritmo de Perú se reduce del 4 por ciento el año pasado al 2,6 por ciento en este, el crecimiento se da en medio de una grave crisis política.

Los dos países restantes, Venezuela y Ecuador, van en la dirección contraria. En el caso de Venezuela, el desplome de su economía ya lleva varios años, y no se ve ninguna luz al final del túnel. Los más de 4 millones de venezolanos que según Naciones Unidas abandonaron el país vecino en los últimos tres años -1,5 millones de ellos en Colombia- son la prueba más dramática e impactante de la debacle económica.

Ecuador se contraerá un 0,1 por ciento de su PIB al final de este año. Las dificultades de su economía provienen de una difícil situación fiscal que requirió la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 4.200 millones de dólares en tres años. Para acceder a estos recursos, el gobierno de Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas que incluyen el recorte de los subsidios a los combustibles. Esta decisión desató una huelga general y una andanada de protestas callejeras que llevan más de diez días.

Las violentas manifestaciones -con saldo de 5 muertos, más de 550 heridos y mil detenidos- son lideradas por las poderosas organizaciones indígenas y forzaron al presidente Moreno a trasladar por unos días su despacho a Guayaquil. Aunque el mandatario regresó a su capital, Quito, y mantiene en su decisión de los recortes, la negociación con los indígenas incluye compensaciones y otras inversiones que debilitarán la potencia de su ajuste económico.

En el panorama de la región andina encontramos hoy desplome económico en Venezuela, huelga por ajustes fiscales en Ecuador, crisis política en Perú y el camino hacia la tercera reelección en Bolivia.

Mientras que economía y política retroalimentaron la crisis que hoy atraviesa Ecuador, en el caso peruano se desacoplaron. Hace unos días, el presidente inca, Martín Vizcarra, en uso de una facultad constitucional, cerró el Congreso en un pulso político alrededor de sus medidas anticorrupción. Esta decisión generó la más grave crisis política de los últimos 20 años en Perú.

Sin embargo, Vizcarra ha encarrilado la crisis en cauces institucionales y cuenta con el apoyo popular y de los militares. El consenso acerca de los fundamentos de la política económica protegió la economía peruana de un impacto mayor.

La economía yace también detrás de la alta posibilidad de que Evo Morales gane por cuarta vez la presidencia de Bolivia en las elecciones por celebrarse dentro de una semana. Esta nación andina sigue creciendo a casi 4 por ciento, a pesar de la desaceleración regional, y sus habitantes son optimistas, en su mayoría, frente al desempeño económico.

La vuelta por el barrio termina en Venezuela, que se ha convertido en un caso perdido tanto en lo político como en lo económico. El desafío diplomático e interno que para Nicolás Maduro significó la entrada del presidente encargado, Juan Guaidó, al ruedo no se ha traducido en un cambio de régimen. Maduro aparece hoy más atornillado en el poder, mientras que la oposición y Estados Unidos lucen divididos y confundidos en su estrategia.

Así, pues, el panorama actual de la región andina no se puede explicar en una sola narrativa. Hay contracción y desplome, pero también crecimiento. Hay autoritarismo y amenazas a la democracia, pero también solidez institucional. Hay gran descontento popular y polarización política, pero también llamados al diálogo. Colombia sorprende por su ritmo económico, aun con el problema del desempleo, aunque su ambiente político está enrarecido y los niveles de pesimismo, muy altos.

Un balance agrídule para un vecindario caracterizado por estar siempre en problemas.

POT por acuerdo



Una herramienta fundamental
Germán Vargas Lleras

El Concejo distrital se ocupa este mes del estudio y la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. El reto es enorme y apasionante. Definir la ciudad de los próximos 12 años. En dónde y cómo se construirá la vivienda para más de 1 millón de nuevos habitantes, por qué vías nos moveremos y qué tipo de transporte utilizaremos, cómo serán las relaciones de la ciudad con la Sabana y los municipios vecinos, qué futuro les espera a nuestros cerros orientales y al río Bogotá. Cómo proyectar esa ciudad consultando, a la vez, nuestras realidades e idiosincrasia, las tendencias y necesidades de las ciudades modernas, y cómo conseguirlo lejos de los intereses políticos y de los particulares. Cómo se explica que Bogotá puede llevar 8 años sin la fundamental herramienta del POT, una vergüenza.

El proyecto presentado aspira a frenar el crecimiento desordenado e insostenible de la Sabana, pues apuesta a producir dentro de la ciudad las viviendas requeridas para las siguientes generaciones. Grandes proyectos como Lagos de Torca, Ciudad Norte, Ciudad Usme, Ciudad Río y Lagos del Tunjuelo permitirán atender con elevados estándares de calidad la demanda de vivienda de estratos populares, haciendo el mejor uso de los subsidios y programas del Gobierno Nacional como el de Mi Casa Ya.

El nuevo POT es respetuoso de los diferentes fallos y normativas ambientales en áreas protegidas como los cerros orientales,

la reserva Van der Hammen y el río Bogotá. Además, promueve una adecuada articulación entre la estructura ecológica principal y los diferentes espacios públicos, con lo cual se garantizan más y mejores áreas para la recreación y el turismo. El suelo de protección ambiental aumentará en más de 30.000 hectáreas.

Muy importante que el POT reconozca la ciudad por sus áreas de actividad y potencialice la mezcla de usos del suelo en zonas de renovación urbana y corredores de transporte masivo. Y, así mismo, que proteja las zonas residenciales, impidiendo que en estas se desarrollen actividades de alto impacto dentro del concepto de zonas urbanas homogéneas. Gran oportunidad para clarificar la normativa de numerosos sectores que hoy no la tienen, con el constante deterioro a que se ven expuestas. Y vale la pena destacar el régimen de transición, que garantiza que el Plan Parcial del CAN (42 hectáreas) mantenga su vigencia. Por supuesto, el POT también

contiene propuestas polémicas que valdría la pena revisar en los debates que restan por tramitar en el Concejo. En primer lugar, la información sobre el crecimiento esperado de la población y el cambio en la composición de los hogares. De esos datos actualizados dependerán la edificabilidad requerida y la incorporación de suelo rural a suelo de expansión.

Dudas en torno a la vigencia del POT, también en torno a las polémicas y quizás innecesarias 14 troncales de TransMilenio, a la viabilidad de la subterránea de redes eléctricas planteada, al futuro del relleno Doña Juana, a las nuevas exigencias para las iglesias o las nuevas disposiciones frente a bienes de interés cultural, por citar algunos ejemplos. Todas estas cuestiones deben discutirse abiertamente y de cara a la ciudadanía.

Mucha atención a los programas de renovación urbana planeados. Solamente en el proyecto Alameda Entre Parques se plantea demoler 2.800 viviendas y más de 5.000 establecimientos comerciales y talleres que hoy generan más de 30.000 empleos, y así mismo con el área para uso industrial, que se reduce notablemente y no se compensa en el proyecto, siendo que la ciudad alberga el 25 por ciento de la industria nacional.

Pero, más allá de lo señalado, conengamos en que es un proyecto serio, técnicamente estructurado y sostenible. Pensado para una ciudad moderna y funcional. Ojalá consiguiera aprobarse por acuerdo.

FRASE DE LA SEMANA "La vida del presidente no es lo más importante, lo más importante es el mantenimiento del orden y de la paz".

Lenín Moreno, presidente del Ecuador, sobre las protestas que se viven en su país.

Cero basura



Medidas excepcionales
Jullana Pungluppi*

Indignación, impotencia, dolor, rechazo y todos los sentimientos asociados nos causaron las imágenes de niños y familias en los rellenos sanitarios de Puerto Carreño, Maicao y Riohacha.

Son imágenes que duelen pero que, tristemente, no son nuevas. Cada una de estas ciudades es una manifestación de problemáticas sociales muy complejas en las que confluyen temas migratorios, étnicos, territoriales y, por supuesto, de pobreza.

En cada basurero detonan círculos viciosos. Su fétido olor habla por sí solo. Los entes de control y los medios venían advirtiéndolo sobre la situación de las amorfías, en Vichada. En La Guajira, las historias del centro de acopio del mercado nuevo demuestran que estamos lejos de dimensionar lo que significa que el departamento más pobre sea receptor de 166.000 migrantes, 44.000 menores de edad, muchas en embarazo, sin controles prenatales.

Cada situación requiere su propio abordaje, y en algunos casos incluirá medidas asistencialistas que no siempre gustan, mientras entran en efecto otras más sostenibles. Hay retos de interculturalidad.

Vale la pena resaltar que el pueblo amorúa es semimóvil y binacional, lo que dificulta el arraigo a sus tierras y la sostenibilidad de proyectos productivos. Los cabildos manejan con autonomía sus territorios. Las familias que encontramos en el relleno estaban inscritas en programas del ICBF y habían recibido indemnización de la Unidad de Víctimas. Los flujos migratorios dificultan el aprovechamiento de estas ayudas.

Es imperativo prohibir el acceso a los rellenos. Estos NO son lugar para niños. Se reforzarán los Equipos Móviles de Protección Integral para sensibilizar en trabajo infantil y, de ser necesario, abrir procesos de restablecimiento de derechos.

Pero lo más importante es hacer del reciclaje una labor digna y abordar las causas estructurales que llevan a familias al desesperado rebusque en estos fétidos escenarios.

En Puerto Carreño, el ICBF tomará medidas excepcionales en 5 asentamientos temporales. Se crearán Espacios Étnicos de Atención, especialmente diseñados para estos territorios, que tendrán pedagogos y psicólogos, y operarán alrededor de ollas comunitarias con ingredientes autóctonos.

Para los jóvenes, el foco será en prevención de consumo de sustancias psicoactivas y embarazo adolescente, con enfoque diferencial. Se trabajará con cooperantes para dignificar estos espacios, sobre todo en materia de agua y saneamiento, sin promover incentivos perversos.

En los resguardos se deben concentrar los esfuerzos para promover el arraigo de las comunidades a sus tierras.

En La Guajira, los números son desgarradores. El Centro de Atención Integral, que maneja Acnur, y el Centro de Atención al Refugiado, de Pastoral Social, atienden a 1.500 personas, frente a más de 56.000 migrantes que han llegado.

Esta semana llegaremos desde el ICBF a Villa del Sur, donde viven 1.000 familias en pobreza. Llegarán 4 unidades de búsqueda activa (UBA) del Plan Nil+, que ya ha logrado una disminución del 60 por ciento en la mortalidad infantil en este departamento. Las UBA harán tamizaje nutricional e identificarán déficits en cobertura de primera infancia y niños desescolarizados, y se hará plan de choque.

En Maicao se intervendrán asentamientos informales como Nueva Esperanza, para prevenir desnutrición y promover la reconversión laboral alrededor del relleno regional del norte.

No son pocos los retos que implica la diversidad étnica en Colombia, ni menos los de ser el segundo país receptor de migrantes del mundo. Pero es el momento de poner nuestra institucionalidad a prueba y, sobre todo, de demostrar que la prevalencia de los derechos de los niños no es un relleno.